

LOS NUEVOS TRATADOS DE LA OMPI O TRATADOS INTERNET

(sobre derecho de autor y sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas)

Y SUS IMPLICANCIAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

por Santiago Schuster y Jorge Mahú

El 20 de diciembre de 1996, durante la Conferencia Diplomática de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, celebrada en Ginebra, fueron adoptados los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, en su sigla en inglés, o TODA, en español) y sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas (WPPT, en su sigla en inglés, o TOIEF, en español).¹

TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHOS DE AUTOR (TODA)

Este Tratado constituye de hecho una revisión al Convenio de Berna, 25 años después de adoptada el Acta de París de 1971, permitiendo adecuar el sistema internacional de protección de los derechos de autor a las nuevas tecnologías, especialmente en el campo digital y en el de las telecomunicaciones, ampliando la protección a nuevos usos o formas de explotación de las obras intelectuales.

Las razones por las cuales se optó finalmente por la redacción de un instrumento separado al Convenio de Berna y no una modificación actualizadora, como había sido el proceso normal de evolución del Convenio de Berna desde su inicio en 1886 hasta el Acta de París de 1971, se deriva del hecho que para una nueva revisión se requiere de la unanimidad de votos, conforme lo dispuesto en el artículo 27 del CB, lo cual era improbable de alcanzar dado el número actual de países miembros de la Unión de Berna.

Al respecto cabe señalar que Chile es miembros de la Unión de Berna desde 1970, y de su última versión correspondiente al Acta de París, desde 1975 (DS. N°266, de 1975). Asimismo, Chile es uno de los 51 países firmantes del nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor que se comenta.

¹ El Congreso Nacional ha aprobado estos Tratados con fecha 6 de marzo de 2001.

Preámbulo

Tal como se indica en el Preámbulo de dicho instrumento internacional, el propósito de este nuevo texto es desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores de la manera más eficaz y uniforme posible, especialmente teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras intelectuales, lo cual ha llevado a los países firmantes del Tratado a reconocer la necesidad de introducir nuevas normas internacionales, así como clarificar ciertas normas vigentes, a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los problemas actuales en materia de derechos de autor.

Relación con el Convenio de Berna y otros tratados (art.1)

Para los países de la Unión de Berna, como Chile, el TODA es un arreglo particular en el sentido del artículo 20 de dicho Convenio, esto es, no es contrario a sus disposiciones y confiere derechos más amplios a los autores que los concedidos a través del Acta de París de 1971.

El Acta de París, a la cual se encuentra vinculado nuestro país desde 1975, pasa a ser obligatoria para todos los países contratantes del TODA, sean o no partes de la Unión de Berna, en lo que se refiere a las disposiciones sustantivas de dicho instrumento contenidas en los artículos 1 a 21 y en el Anexo.

Por otra parte, el TODA no tiene otra conexión con ningún otro Tratado distinto al del Convenio de Berna.

En consecuencia, desde el punto de vista de esta disposición (art. 1), el nuevo Tratado no impone a Chile otra obligación que no sea cumplir con las disposiciones de un Tratado Internacional del cual ya es parte, y con el cual las disposiciones internas se encuentran en gran medida ajustadas.

Ámbito de protección del derecho de autor (art. 2)

En el Tratado se incorpora una disposición que define el ámbito de protección del derecho, ya contenida en los Acuerdos sobre los ADPIC (art. 9.2), ratificado por Chile mediante el DS N°16 del 1995, del Ministerio de RREE.

Dicha disposición se encuentra plenamente en armonía con lo previsto en los artículos 1° y 3° de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) N°17.336.

Aplicación de los principios internacionales del Convenio de Berna (art. 3)

Esta disposición del Nuevo Tratado establece que los principios establecidos en el CB (art. 2 a 6) son aplicables a los derechos consagrados en el TODA. Tales principios son, entre otros, los de protección mínima, ausencia de formalidad, protección automática, trato nacional, los cuales ya rigen las relaciones de Chile con los demás Estados en todas las materias relacionadas con los derechos intelectuales.

Chile es Miembro del Convenio de Berna desde 1975, respecto del Acta de París.

Disposiciones declarativas sobre protección de los programas de ordenador y las bases de datos (Arts. 4 y 5)

Los programas de ordenador y las bases (compilaciones) de datos se declaran protegidos utilizando las mismas palabras que el Acuerdo sobre los ADPIC.

En cuanto a los programas, estos se encuentran regulados en el art. 3º, N°16) de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) N°17.336 y en el art. 10.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante se estudia introducir una breve modificación a través del art. 20 del Proyecto de ley que adecua la legislación interna a los ADPIC (Boletín N°2421-03).

Respecto de las bases de datos, estas también se encuentran incluidas, bajo el concepto de compilación, en el art. 3º, N°1), de la LPI (N°17.336) y en el art. 10.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante se estimó necesario aludir expresamente a las bases de datos computacionales, de allí que se ha propuesto su modificación, a través del art. 20 Proyecto de ley que adecua la legislación interna a los ADPIC (Boletín N°2421-03).

Aprobadas ambas modificaciones no sería necesario nuevas adecuaciones para la entrada en vigencia del TODA.

Derecho de distribución (Art.6)

El Tratado, en cuanto al derecho de distribución, contiene una disposición que se limita a reconocer a los autores el derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad y a permitir a las Partes Contratante (Estados y organizaciones del tipo de la Unión Europea) la determinación de las condiciones en las que aplicará el agotamiento de ese derecho en el caso de primera venta o transferencia de la propiedad del original o de un ejemplar de la obra realizadas con autorización del autor. Dichos originales y ejemplares (copias) son aquéllos susceptibles de ser puestos en circulación como objetos tangibles.

El derecho de distribución se considera comprendido en el derecho de reproducción, conforme lo dispuesto en los artículos 5º, letra q); 17; 29 y 48 de la LPI. En general la ley chilena se ha referido a esta facultad del autor sólo con relación a las obras cinematográficas, literarias, los programas de computación y los fonogramas y videogramas.

Una de las omisiones de nuestra legislación se refiere al agotamiento de este derecho una vez efectuada la primera venta, materia que ha quedado entregada a la libre voluntad de las partes, dado que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley, el autor determinará en el contrato de autorización el territorio de aplicación de los mismos.

La aprobación del Tratado debería permitir una adecuación del derecho interno, en orden a establecer un reconocimiento expreso del derecho y una definición legal más amplia que la actual.

Derecho de alquiler (Art. 7)

El Tratado, siguiendo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (art. 11 y 14.4), reconoce a los autores de programas de ordenador, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas un derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de esas obras, con posibilidades, en ciertos casos, de no aplicación de ese derecho a las obras cinematográficas y, tratándose de obras incorporadas en fonogramas, de sustituir tal derecho por un sistema de remuneración equitativa.

El derecho de alquiler ya se encuentra reconocido expresamente en la LPI respecto de las obras cinematográficas (art. 29), programas computacionales (art. 47), obras literarias (art. 49) y los fonogramas (art. 68) y es ampliamente ejercido por los titulares de los derechos.

No obstante lo anterior, en el proyecto de adecuación de la ley interna a los ADPIC se prevé una definición más precisa de este derecho (Boletín N°2421-03).

Extensión del derecho de comunicación al público a todas las categorías de obras y aplicación del mismo a la transmisión digital interactiva (Art. 8.)

La disposición más importante del Tratado es aquella que extiende el derecho de comunicación pública, que aparece limitado en el Convenio de Berna a ciertas categorías de obras, a cualquier clase de obras y que, al mismo tiempo, considera comprendida, en las explotaciones cubiertas por este derecho, la transmisión “on line” y previa solicitud de una obra, operación descrita en el Tratado como aquella que consiste en la “puesta a disposición del público” de obras, “de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

Se entiende que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del Tratado ni del Convenio de Berna. También indica esa declaración que las disposiciones específicas del Tratado en materia de limitaciones y excepciones (Art. 10) “no impide que una Parte Contratante aplique el Artículo 11 *bis.2*” del Convenio de Berna, que permite el establecimiento de una licencia no voluntaria.

En Chile la LPI en sus artículos 17 y 18, letras a) y b), consagra un derecho amplio de comunicación pública que no se ve afectado por las nuevas disposiciones del Tratado.

Ampliación del plazo de protección de las obras fotográficas (Art. 9)

El Tratado obliga a las Partes Contratantes a no aplicar las disposiciones del art. 7.4 del Convenio de Berna a las obras fotográficas, con lo que el plazo mínimo de protección de estas obras se eleva, en general, a 50 años p.m.a.

De acuerdo a los artículos 10, 34 y 35 de la LPI, el plazo de protección de las obras fotográficas ya es de 50 años.

Limitaciones y excepciones (Art. 10)

De acuerdo a esta norma, los derechos reconocidos en el Tratado a los autores pueden ser objeto de limitaciones o excepciones en las legislaciones de las Partes Contratantes, en ciertos casos especiales, que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Las Partes Contratantes están obligadas, al aplicar el Convenio de Berna, a restringir cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en este Convenio cumpliendo las tres condiciones mencionadas.

Queda entendido que las disposiciones mencionadas en el Artículo 10.1 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital en sus legislaciones nacionales, tal como han sido consideradas aceptables en virtud del Convenio de Berna, y establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de redes numéricas.

En este sentido, estas obligaciones no reducen ni amplían al ámbito de aplicación de las limitaciones y excepciones permitidas por el CB.

En todo caso, hay que señalar que una obligación similar ya fue impuesta por el artículo 13 de los ADPIC, lo cual ha motivado la idea de incorporar una disposición general similar en la legislación interna. Tal como se establece en el artículo 20 del Proyecto que adecua nuestra ley a los ADPIC (Boletín N°2421-03).

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas y a las de información sobre la gestión de derechos (Arts. 11 y 12)

De acuerdo con el Tratado, las Partes Contratantes están obligadas a proporcionar una protección jurídica adecuada y unas sanciones jurídicas eficaces contra quienes eluden medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en el ejercicio de los derechos que se les reconocen en el Tratado y que, respecto de sus obras, restrinjan actos no autorizados por los autores concernidos ni permitidos por la Ley.

Igualmente, las Partes Contratantes están obligadas a proporcionar sanciones jurídicas eficaces contra el que realice un acto de supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre gestión de derechos, o de distribución, importación para distribución, emisión o comunicación al público no autorizadas de ejemplares en los que se haya suprimido o alterado sin autorización dicha información, cuando con conocimiento de causa los lleve a efecto sabiendo o teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos (ya exclusivos, ya de remuneración) previstos en el Tratado o en el Convenio de Berna.

La disposición del párrafo 12.2 no autoriza a las Partes Contratantes a establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tengan el efecto de imponer formalidades no permitidas en el Convenio de Berna ni en el Tratado y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el goce de los derechos reconocidos en dicho Tratado.

Normas como éstas no existen en nuestro derecho interno, por tanto ellas implican adoptar una norma de igual naturaleza. Estas normas son similares a las establecidas en el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Estas disposiciones no consagran nuevos derechos sustantivos a los autores, sino que prevén la obligación de los Estados partes, de sancionar civil o penalmente las conductas descritas en las normas, que se consideran fundamentales reprimir a efectos de permitir el ejercicio futuro de los derechos actualmente consagrado a favor de los autores en la era digital, especialmente en las transmisiones como Internet.

Aplicación en el tiempo (Art. 13)

Esta disposición sólo pretende fijar el alcance de la protección otorgada por el nuevo Tratado, la cual sólo alcanzará a las obras actualmente protegidas en virtud del Convenio de Berna y la legislación interna.

Disposiciones sobre observancia de los derechos (Art. 14)

Las disposiciones detalladas sobre la observancia de los derechos previstas en el artículo 36.1 del Convenio de Berna y en la Parte III de los ADPIC (art. 41 a 61) han sido sustituidas en una norma general resumida como la prevista en el artículo 14, que establece una obligación para las Partes Contratantes de asegurarse de que, en su legislación, existan procedimientos, medidas y sanciones eficaces para reprimir, prevenir y disuadir cualesquiera infracción de los derechos.

De acuerdo a lo anterior, esta disposición es similar a las obligaciones ya asumidas por el Estado de Chile a través del CB y del Acuerdo sobre los ADPIC, en los cuales se regulan extensamente esta obligación. Esta materia a motivado la inclusión de disposiciones especiales en el Proyecto de adecuación de la normativa interna a los ADPIC (Boletín N°2421-03).

Normas administrativas (Art. 15 a 25)

No demandan ninguna adecuación de la legislación interna.

Entrada en vigor del Tratado (Art. 20)

El Tratado, que está abierto a todos los países miembros de la OMPI y a las organizaciones intergubernamentales que sean admitidas por la Asamblea de las Partes Contratantes de acuerdo con lo previsto en el propio Tratado (Art. 17), entrará en vigor 3 meses después de su ratificación o adhesión por un mínimo de 30 Estados.

Chile es uno de los 51 Estados firmantes de este Tratado.

TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIONES O EJECUCIONES Y FONOGRAMAS Y SUS DECLARACIONES INTERPRETATIVAS (TOIEF)

Los Comités de Expertos convocados por la OMPI para estudiar un posible Protocolo al Convenio de Berna, recibieron en 1992, el mandato de la Asamblea de la Unión de Berna de preparar un posible nuevo Instrumento sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, con el encargo de examinar todas las cuestiones relativas a la protección internacional eficaz de los derechos de esta categoría de titulares.

Durante la fase preparatoria que condujeron a la elaboración del TOIEF, se reconoció la necesidad de elaborar instrumento completo, más que un instrumento aclaratorio de las normas internacionales existentes, esto es, de la Convención de Roma y el Convenio Fonogramas (de los cuales Chile es parte desde 1974 y 1977 respectivamente),

principalmente en atención a la falta de adhesión de muchos Estados a esos dos instrumentos internacionales.

Chile es uno de los 50 países signatarios de este nuevo instrumento internacional de protección de los derechos de los artistas y los productores de fonogramas.

Preámbulo

Tal como se indica en el Preámbulo de dicho instrumento internacional, el propósito de este nuevo texto es desarrollar y mantener la protección de artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible, especialmente teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras intelectuales, lo cual ha llevado a los países firmantes del Tratado a reconocer la necesidad de introducir nuevas normas internacionales, a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los problemas actuales en materia de derechos de conexos.

Relación con otros Tratados (Art. 1)

El Tratado no va en detrimento de las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes adheridas a la Convención de Roma, como es el caso de Chile desde 1974 (DS N°390, de 1975, del Ministerio de RREE).

Se recoge en el Tratado el artículo 1º de la Convención de Roma sobre salvaguardia del derecho de autor, cuya disposición aclara la relación con el derecho de autor sobre obras, en el sentido de que: a) cuando fuere necesaria la autorización del autor de una obra incorporada en el fonograma y la de un artista o productor de los derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del autor; y b) que nada impedirá que una Parte Contratante prevea derechos exclusivos para un artista o productor de fonogramas que vayan más allá de los que deben preverse en virtud del Tratado.

Adicionalmente, el Tratado proclama su independencia respecto de cualquier otro tratado.

Al respecto cabe señalar que Chile es parte de la Convención de Roma, y que tales disposiciones fueron las que sirvieron de base para la aprobación del Título II de la LPI, referente a los derechos conexos a los derechos de autor.

Desde esa perspectiva, las disposiciones sobre salvaguarda de los derechos de autor frente a los derechos consagradas en este nuevo instrumento ya se encuentran incorporadas en nuestra legislación interna, específicamente en los artículos 65, inciso

2º, y 68, inciso 2º, de la LPI, conforme lo establecido en el artículo 1º de la Convención de Roma.

Definiciones (Art. 2)

En general las definiciones adoptadas en el TOIEF se corresponden con las existentes en la Convención de Roma, y por ende con las establecidas en la LPI chilena, con algunas leves variaciones.

La definición de artista se extiende a los que efectúen la interpretación o ejecución de expresiones del folclore. Las definiciones de fonograma, fijación y productor de fonogramas de la misma Convención se modifican básicamente para adaptarlas al entorno digital haciéndose constar, que los derechos sobre el fonograma no son afectados en modo alguno por su incorporación a una obra cinematográfica u otra obra audiovisual. La definición de radiodifusión, además de adaptarse a ese entorno, incorpora la transmisión por satélite y la de señales codificadas. Se conserva sustancialmente la definición de publicación. Y se añade a la lista de definiciones de la Convención la de comunicación al público (haciendo referencia a la transmisión al público de la representación -digital- de sonidos), omitiéndose la de retransmisión.

Al respecto cabe señalar que, una de las definiciones no contempladas en la ley interna es el concepto “Fijación”, que no se emplea, pues se utiliza la expresión “grabación”, que tampoco define. Tampoco se incluye una definición del término “Comunicación al Público”, como de ningún otro de los derechos patrimoniales establecidos a favor de los autores o de los titulares de los derechos. La ley ha recurrido para fijar su alcance a señalar ciertos actos a vía de ejemplo. En este sentido, en la actualidad en alcance de cada una de las facultades patrimoniales de los autores y de los titulares de los derechos conexos es determinado por la interpretación judicial.

En una eventual modificación de la LPI deberían adoptarse los términos fijación y comunicación pública, que son más amplios que los actuales utilizados por la norma interna de grabación y ejecución pública, pero no demanda una modificación inmediata de la ley.

Adicionalmente, dado que el avance tecnológico ha creado nuevas modalidades de utilización de las obras, es necesario que en un futuro se legisle agregando la definición de todos los derechos concedidos para la ley a los titulares de los derechos de autor y los derechos conexos, para facilitar la labor de interpretación de la ley.

Beneficiario de la protección (Art. 3)

La protección del Tratado esta prevista únicamente para los artistas de interpretaciones exclusivamente sonoras y a los productores de fonogramas, ambos grupos de profesionales ya protegidos por la legislación interna.

Empero la protección de la LPI nacional, es más extensa que la prevista en este Tratado y la Convención de Roma, pues también se extiende a los artistas audiovisuales.

Trato nacional (Art. 4)

El Tratado recoge la regla de trato nacional de la Convención de Roma (art. 2.2), es decir, limitando su alcance a los derechos específicamente reconocidos en su texto. Y añade que esa regla “no será aplicable (por una Parte Contratante a los nacionales de otra Parte Contratante) en la medida en que esa otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud del Artículo 15.3 del presente Tratado”. Estas reservas se refieren al derecho de remuneración por la radiodifusión y comunicación al público de fonogramas comerciales.

Derechos morales de los artistas (Art. 5)

El Tratado reconoce a los artistas un derecho moral del mismo contenido que el reconocido a los autores en el artículo 6 *bis* del Convenio de Berna. Esta es una de las innovaciones más importante del nuevo tratado internacional.

En la actualidad nuestra ley consagra derechos morales (de un claro contenido personal) únicamente a favor de los autores. Las modernas legislaciones del mundo, al igual que el presente Tratado, han estimado necesario conceder a lo menos dos de esas prerrogativas morales a los intérpretes, que son el derecho de paternidad sobre sus interpretaciones y el derecho de integridad sobre la misma, los cuales le permitirán reivindicar su nombre, si este no es mencionado cuando se utiliza la grabación de sus interpretaciones, o estas se modifican sin su previa autorización.

La actual LPI consagra parcialmente el derecho de paternidad en el artículo 68, más que como un derecho como una obligación del productor. Esta norma requiere de una adecuación de la ley interna

Derechos exclusivos reconocidos a los artistas (Arts. 6. 7. 8. 9 y 10)

El Tratado reconoce a los artistas los siguientes derechos exclusivos:

- sobre sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas,

- a) el de autorizar su radiodifusión y su comunicación al público, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida, y
- b) el de autorizar su fijación;
 - y sobre sus interpretaciones fijadas en fonogramas, los de
- c) autorizar su reproducción directa o indirecta, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma;
- d) autorizar su distribución en los términos señalados para el derecho de autor en el artículo 6° del TODA
- e) autorizar su alquiler comercial al público tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes y con posibilidad de sustituir este derecho por un sistema de remuneración equitativa en ciertas circunstancias, y
- f) autorizar su puesta a disposición del público ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas (las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas) desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

En general las facultades patrimoniales previstas por el Nuevo Tratado, concuerdan con los atributos económicos consagrados por la LPI a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes en sus artículos 65 y 66, no obstante es necesario reconocer la deficiente regulación normativa de los mismos.

La única facultad no comprendida dentro del derecho exclusivo de artista consagrado en la LPI, es el derecho de distribución el cual, se encuentra comprendido dentro del derecho de reproducción, tal como fue analizado anteriormente con relación al artículo 6° del TODA:

Asimismo, la mayoría de estas facultades ya se encuentran consagradas, si bien no como derechos exclusivos sino como un derecho a prohibir, en la Convención de Roma, y más recientemente en el artículo 14.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En atención a la reciente entrada en vigencia, las observaciones a la redacción del artículo 66 de la LPI, se pretenden corregir a través del Proyecto de adecuación de la ley interna a los ADPIC, sugiriéndose en su artículo 20 una nueva redacción (Boletín N°2421-03).

Derechos exclusivos concedidos a los productores de fonogramas (Arts. 11. 12. 13 y 14)

Al productor de fonogramas se han otorgado derechos exclusivos de autorizar la reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposición al público de sus fonogramas en los términos expresados en el párrafo anterior, letras c), d), e) y f), para los artistas.

Al respecto, cabe tener presente que, a partir de la modificación introducida en 1992 a la LPI, el productor goza de un estatuto jurídico que ya consagra derechos exclusivos amplios sobre sus fonogramas, que le permiten controlar todas sus posibles explotaciones, superiores a las facultades reconocidas por la Convención de Roma y los Acuerdos sobre los ADPIC.

Derecho de remuneración equitativa de los artistas y de los productores de fonogramas por la radiodifusión y comunicación al público de fonogramas comerciales (Art. 15)

El Tratado concede a los artistas y a los productores de fonogramas el derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas. A efectos de este derecho, los fonogramas puestos a disposición del público en la forma directa se consideran como si se hubiesen publicado con fines comerciales.

Se permite a las legislaciones de las Partes Contratantes establecer cuál de los cotitulares de este derecho será el que percibirá la remuneración y la participación de cada uno de ellos en la misma, caso de no llegar a un acuerdo. También se permite a cualquier Parte Contratante declarar que aplicará las disposiciones aludidas únicamente con relación a ciertas utilidades, o que limitará su aplicación de alguna otra manera, o que no las aplicará.

Este derecho se encuentra consagrado a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas, en el artículo 67 de la LPI, habiéndose determinado en la misma legislación interna, sus beneficiarios, forma de distribución y modos de recaudación.

Limitaciones y excepciones (Art. 16)

El Tratado permite a las Partes Contratantes establecer en sus legislaciones, respecto de la protección de los artistas y productores fonográficos, las mismas limitaciones o excepciones previstas en esas legislaciones para los derechos de autor. Se reproduce en esta materia, *mutatis mutandis*, la disposición aplicable al derecho de autor que se ha mencionado en este informe, con relación al artículo 10 del TODA; y las indicaciones relativas al Proyecto de Ley contenido en el Boletín N°2421-03.

Duración de la protección de los artistas y de los productores de fonogramas (Art. 17)

El plazo de duración de los derechos concedidos a los artistas y a los productores de fonogramas se fija en 50 años contados, en el caso de los artistas, desde el final del año de fijación de su interpretación o ejecución, y en el de los productores, desde el final del año de publicación del fonograma o, cuando ésta no haya tenido lugar en el plazo mencionado, desde el final del año de su fijación.

Ambos plazos de protección son coincidentes con los consagrados en la legislación interna, en los artículo 68 y 70 de la LPI:

Disposiciones relativas a las medidas tecnológicas, a las de información sobre la gestión de derechos, a las obligaciones de observancia de los mismos y a la entrada en vigor del Tratado (Arts. 18 a 33)

Se aplica mutatis mutandis lo dicho para el derecho de autor en los párrafos relativos a los artículos 11 a 25.

(Fin del documento)

Agosto de 2000